

La estafa legal de la energía privada

OSVALDO DÚRAN

La dictadura neoliberal del libre comercio conduce a la privatización de la vida, incluyendo el agua, las plantas, los animales y hasta las personas, y se facilita por los llamados *derechos de propiedad intelectual*, las patentes, la inversión externa, los tratados comerciales, etcétera, por medio de los cuales el capital transnacional está recolonizando nuestros países. Toda la naturaleza reducida a *recursos naturales* y a mercancías para explotar es privatizable. Ése es el radical negocio del capital ante la vida. Vivimos una época de invasiones y colonialismo renovados, solo que ahora no son las bulas papales y los derechos concedidos por reyes católicos, sino los tratados de libre comercio los que dictan las reglas. Como indica Eduardo Galeano, ahora al imperialismo se le llama globalización.

La privatización ha sido un excelente negocio únicamente para el capital privado, nunca para los pueblos de los países a los cuales se les implantó el crimen legalizado de las políticas económicas empobrecedoras. Porque eso es el neoliberalismo: un crimen impune y prolongado de millones y millones de personas en el planeta, diseñado y aplicado por el gobierno del mundo regido desde Davos y la red de entidades llamadas -solo por el poder de las empresas del comercio informativo- de *cooperación internacional*, a las cuales se unen sus socios locales. Argentina apenas se empieza a reponer de uno de los saqueos más funestos de la historia de América Latina, pero en Costa Rica los neoliberales siguen calcando y ofreciendo ese modelo como la *tierra prometida*. Para esto tienen que mentir y ocultar que, tras dos décadas de libre mercado, se destruyó la base productiva de Argentina y se aseguró el empobrecimiento escandaloso de 18,2 millones de personas, un 51 por ciento de la población, como lo reconoció el presidente Duhalde (Petras y Veltmeyer 2004). Los neoliberales ticos nos siguen habando de las ventajas del mercado y de la urgencia de firmar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, desconociendo también que la debacle de la economía mexicana es, principalmente, resultado de algo más de una década del mismo modelo liberal que pretenden imponernos. La privatización resultó ser una política económica fraudulenta, corrupta,

irresponsable, impuesta, innecesaria y desnacionalizante. También, ha facilitado una mayor concentración de la riqueza y, en la mayoría de los casos, resultó absolutamente incompetente para atender las necesidades de la población.

¿Podemos reconocer esos signos de descomposición social en la generación privada de electricidad en Costa Rica? En las siguientes líneas iniciaremos la discusión sobre estos elementos.

La generación privada de electricidad en Costa Rica no se puede justificar diciendo que el Instituto Costarricense de Electricidad (Ice) no puede satisfacer la demanda nacional. Éste es un negocio fraudulento porque, como está demostrado, el Ice tiene capacidad suficiente para satisfacer la demanda nacional. Ya indicamos (*Ambientico* 133, 2004) que si el Ice eleva su eficiencia utilizando al máximo su capacidad instalada para generar energía eléctrica, acelera la entrada en operación de proyectos públicos, reinvierte públicamente sus elevados excedentes, deja de servir al juego de la estafa privada institucionalizada y se decide a enfrentar el desplazamiento en la generación de electricidad del que es objeto por parte del capital privado, podremos entonces recuperar el perfil de desarrollo que le dio origen. Sin embargo, ni el Ice como institución ni los sindicatos han sabido (¿o no quieren?) aprovechar todo el apoyo social que tiene la institución y enfrentar la estafa de la producción privada de electricidad. Desgraciadamente, el lindero entre la inacción y la complicidad es demasiado sutil.

El fraude también responde a la creación del *estado mínimo* al servicio del capital privado. Los neoliberales intentan disimular su vocación de usura hablando de crear un *estado fuerte* y no un *estado grande*. Así tratan de que aceptemos -gracias a la desinformación- que el estado es obsoleto, despilfarrador, ineficiente, etcétera. En toda América Latina eso fue parte de una estrategia: descomponer el estado, usurparlo, saquearlo, corromperlo y, luego, decir que no sirve para nada. El camino en Costa Rica es el mismo. Estamos ante una total incoherencia, ya que mientras se le imponen al Ice extremas limitaciones aduciendo que no hay dinero para la inversión pública y que -incluso- es deficitario (ambas

Osvaldo Durán Castro, sociólogo, es presidente de la Asociación Proal y profesor en la Universidad de Costa Rica.

tesis falsas), se pagan exorbitantes sumas a los generadores y cogeneradores privados cuya electricidad es mucho más cara que la generada por el Ice. El excedente neto del sector eléctrico de esta entidad fue de 27.145 millones de colones en 2001 y de 31.132 en 2002. Esos mismos años el pago a 28 empresas privadas se elevó a 29.449 y 35.530 millones (Ice 2003). Por esto decimos que es una estafa institucionalizada: porque el estado acepta y propicia pagar a los privados más que todos sus excedentes y además trata de hacernos creer que eso es necesario.

La privatización es un excelente escenario para las coimas y toda suerte de tráfico de influencias políticas. No solo se utiliza al estado para facilitar a los privados su control del mercado sino que los funcionarios cobran precios de lujo por los favores para asegurar que las licitaciones se adjudiquen a tal o cual empresa y se eliminen los competidores. Evidentemente, hay capital privado honesto, pero eso es cada vez menos la norma. El Proyecto Hidroeléctrico La Joya, un *bot* (construcción, operación y transferencia) que el Ice acordó con la empresa transnacional Unión Fenosa de España, es un claro ejemplo de corrupción. Para lograr la adjudicación la empresa pagó una coima de \$58.000 a un directivo, que antes había sido diputado y persona de confianza del presidente de la República. Esta fusión del estado con los privados no conduce a un estado fuerte sino a un estado minimizado, capturado, secuestrado por los privados. Este tipo de corrupción es realmente un asalto a toda la sociedad.

La privatización ha utilizado al estado y permitido que desde la "cocina", por ejemplo desde el Consejo Directivo del Ice, se sirvan los proyectos de generación privada. Esto es posible porque el estado es administrado por el mismo equipo de tecnócratas y políticos que integran las juntas directivas y son accionistas de las empresas que "ayudan" a suplir la demanda de electricidad. Lo público y lo privado se fusionaron en el estado mínimo al servicio del capital privado. Para ellos la discusión esencial no es cuánto debe invertir el Ice sino cuánto debe dejar de invertir para abrir espacio a los privados.

La privatización ha utilizado al estado y permitido que desde la "cocina", por ejemplo desde el Consejo Directivo del Ice, se sirvan los proyectos de generación privada. Esto es posible porque el estado es administrado por el mismo equipo de tecnócratas y políticos que integran las juntas directivas y son accionistas de las empresas que "ayudan" a suplir la demanda de electricidad. Lo público y lo privado se fusionaron en el estado mínimo al servicio del capital privado. Para ellos la discusión esencial no es cuánto debe invertir el Ice sino cuánto debe dejar de invertir para abrir espacio a los privados.

Al pueblo de Costa Rica nunca se le consultó si deseaba convivir y mantener un grupo de empresas generadoras de electricidad privilegiadas. Y es que en una

democracia a medias como la nuestra, en la que por ejemplo se boicotean todos los intentos de crear la figura del plebiscito, la gente no tiene derecho a opinar. Es poca la gente que sabe que 25 de cada 100 colones del recibo de electricidad que paga van a los canastos de los generadores privados. Si los gobiernos de José María Figueres Olsen -cuya familia recibió 11,4 millones de colones diarios durante 2001 y 2002 por sus ventas de electricidad privada al Ice (*Ambientico* 133, 2004)- y Miguel Ángel Rodríguez hubiesen consultado a la gente sobre la generación privada, es seguro que ni siquiera se hubieran discutido las leyes 7.200 y 7.508. El pueblo de Costa Rica y el Ice están siendo estafados con la complicidad del estado. Cada colón pagado a los cogeneradores y generadores privados es público, de los y las ciudadanos. Pero como el estado ya no es de la gente sino que parece propiedad privada, el Ice -por obligación



Foro de comunidades contra proyectos hidroeléctricos en Tucurrique

O. Durán

de esas leyes -transfiere los recursos públicos al capital privado. La imposición de este negocio también conlleva el ocultamiento de la información: el Ice no ha querido asumir su obligación de ser transparente y totalmente abierto con la información sobre la generación privada. Esas operaciones no son un secreto de estado y mucho menos un asunto "confidencial" como lo entiende el Ice (según carta de Pablo Cob -presidente ejecutivo del Ice- a Osvaldo Durán. Oficio PE-329-04). Ocultar esta información a las comunidades y al país es un desacato a la Constitución Política. Éste es un asunto pendiente que se resolverá en las instancias que corresponda y que tiene que ver con la disyuntiva ya expuesta de si el Ice hará alianza con sus defensores o con sus sepultureros.

El Ice tiene todas las condiciones técnicas y financieras para invertir en todos los proyectos de energía suficientes para suplir la demanda nacional. Pero en este punto debemos diferenciar con meridiana claridad si construimos una estrategia para atender las necesidades nacionales estableciendo prioridades combinadas de desarrollo social y crecimiento productivo, o si permitimos que el Ice -y los privados también- den rienda suelta a su ímpetu productivista y nos consuman en la generación eléctrica como negocio para la exportación. Ya sabemos que solo gracias a la desinformación es que los defensores del productivismo energético niegan las

vinculaciones entre la generación ilimitada de electricidad y el Sistema de Integración Eléctrica de Centroamérica (ya antes habíamos indicado cómo, con la probación de este mini TLC eléctrico se permitió que la transnacional española Endesa se hiciera socia de los estados de la región), y con los proyectos privados del Plan Puebla Panamá y el Plan Colombia. Los mismos presidentes de la región centroamericana en su última cumbre, en 2004, celebraron la "unión" de estos dos planes, que no son más que parte de la estrategia hemisférica y global de explotación de la naturaleza en nuestra región. La prioridad energética de estos proyectos es la interconexión para facilitar el crecimiento económico basado en la inversión externa directa, y no el desarrollo social en la región: la pobreza, en todas sus formas, es el indicador de mayor crecimiento en la región. Los gobiernos siguen actuando como facilitadores de este proceso. La soberanía energética, que debería ser la guía en esta materia, está cada vez más lejos y solo tiene defensores en las resistencias que de distinta manera ejercen los pueblos de la región desplazados, asesinados y perseguidos por defender su vida, la naturaleza y el agua.

La privatización de la energía abre un canal adicional para la desnacionalización de la economía. La estrategia fijada en la atracción de inversión externa necesita crear todas las condiciones para hacer "atractivo" el país. Esto implica desregulaciones, garantías de flexibilización laboral, condiciones para la explotación del agua y otras fuentes energéticas y hasta derechos de propiedad sobre la naturaleza, lo cual -como señalamos- se consagraría con la firma del TLC, gracias a los derechos de propiedad intelectual y las patentes, propiciadas por la biopiratería de instituciones científicas del país al servicio del capital transnacional. El caso del bot La Joya de Unión Fenosa nos permite destacar, por ahora, tres niveles de conflicto social provocado por la generación privada: (1) *Violación de derechos comunitarios*, o lo que definimos como principio de soberanía comunitaria, ya que la gente pierde el derecho de que el desarrollo sea beneficioso para ella y para la naturaleza -la destrucción de las fuentes de agua de la comunidad de Tucurrique es el más claro ejemplo de esto, allí el esta-

do ni siquiera pudo garantizar que el agua de las comunidades fuera resguardada-; los tribunales de justicia se han negado a reconocer que los delitos contra la naturaleza son, sin excepción, irreparables, y por eso ha costado tanto que las comunidades sean atendidas y respetadas -no menos dudas deja la actuación del Instituto de Acueductos y Alcantarillados-; como lo hemos dialogado en estas comunidades, la pregunta que se impone es de qué lado está la institucionalidad costarricense. (2) *Mentira de la competencia*: Otro foco de conflicto tiene que ver con la supuesta competencia público-privada; no se puede hablar de competencia sana cuando desde la cocina del estado se cuece el desplazamiento y destrucción de lo público; el Ice debe responder porque -por ejemplo- se descarga el agua del embalse Arenal sin turbinar y porque la burocracia política impide acelerar -o cuando menos permitir un curso normal según

lo planeado- las inversiones públicas (caso PH Pirris), con lo cual se crea el escenario para justificar la generación privada -esto más que competencia pareciera complot. (3) *Privados contra los pueblos*: La generación privada provoca desnacionalización de parte de la

economía nacional; la transnacionalización neoliberal ha creado un espacio global de irresponsabilidad e impunidad a favor de las transnacionales que aprovechan la naturaleza de nuestros países con la complicidad de gobiernos y en alianzas con socios de capital privado nacional; si el capital privado local acepta la propuesta neoliberal de subastar el país deberá soportar en un plazo muy corto respuestas sociales por la defensa de la soberanía económica y social. Debieran poner atención a Bolivia, donde la población ha derrotado la privatización del agua en manos de Bechtel, que es no solo una gran transnacional sino una mimada y privilegiada por los gobiernos pro Bush en el Medio Oriente; también atención a Uruguay, donde las transnacionales Aguas de Bilbao, Aguas de Barcelona y Suez, la privada más grande del planeta, fueron derrotadas; en esos países la vuelta a lo público, y más claramente a lo social con participación efectiva de la gente, constituye una contratendencia a la globalización neoliberal, una recuperación de soberanía y derechos sociales. En Costa Rica, donde hasta ahora el pueblo ha impedido la total



Proyecto La Joya. Al fondo embalse de PH Angostura, en cuenca del Reventazón.

O. Durán

privatización, se trata de afianzar el control nacionalizado, público y, sobre todo, participativo en la gestión del desarrollo. Si a los proyectos públicos desde hace apenas unos años les estamos exigiendo algunas garantías sociales y para la naturaleza, a los privados debiera exigírseles lo mismo, pero además confirmar, como no se ha hecho hasta ahora, que verdaderamente respondan a necesidades reales del pueblo de Costa Rica.

El reto mayor para definir una política energética nacional y global es comprender que ya no se trata únicamente de impedir proyectos energéticos que solo servirán para el lucro privado con la explotación de la naturaleza, sino de reconocer que es urgente un cambio de paradigma de vida que nos oriente hacia el respeto y el

cuidado de la naturaleza y, en el caso del sector energético, principalmente del agua. La prevención y la seguridad legal y operativa para frenar la destrucción de más espacios de vida natural con cualquier tipo de proyectos energéticos debe ser una prioridad. Las autoridades públicas, la empresa privada y todas las personas, tenemos el reto de superar los discursos y convertir el desarrollo sustentable en una práctica y cada vez menos en un discurso. El *proyectismo* energético que irrespeta y destruye la naturaleza, desconoce y ridiculiza la cultura y la espiritualidad de los pueblos, que estimula el crecimiento económico y acelera la inequidad social, y que es excluyente de las poblaciones, jamás podrá siquiera pretender ser una alternativa de desarrollo sustentable.

Referencias bibliográficas

Petras, James y Henry Veltmeyer. 2004. *Las privatizaciones y la desnacionalización de América Latina*. Prometeo libros. Buenos Aires.
Ice. 2003. *Estados Financieros Auditados y opinión de los auditores*. 2001.2002. Ice. San José.

[A LA VENTA]



[Informes y pedidos: 277-3688;
ambientico@una.ac.cr]